

"Lo más caro para un país es lo que no es capaz de producir"

Ángel María Caballero

Presidente de la Asociación Nacional para la Salvación Agropecuaria.

*En el foro sobre el ALCA, Ángel María Caballero, presidente de la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria, hizo un llamado a que todas las organizaciones agropecuarias se unificuen para oponerse a la quiebra y desaparición que el ALCA acarrearía al campo colombiano. Igualmente, considera que el señuelo del ATPDEA "tiene tufo de chantaje", siendo inconmensurablemente mayores los perjuicios permanentes y omnímodos que el país sufriría con el segundo, frente a los exiguos y temporales beneficios del ATPDEA. Caballero también se opone a la convertibilidad, "o sea al cambio masivo de cultivos tradicionales y transitorios por especies tropicales y exóticas". **Deslinda***

Comencemos por definir seguridad alimentaria como el derecho que tienen las naciones a producir sus alimentos para no verse, al carecer de ellos, condenadas a una hambruna o a tener que importarlos al precio que exijan las multinacionales de la comercialización. Colombia perdió esta seguridad en soya, maíz, sorgo, cebada y algodón en la década pasada, y en trigo desde los años sesenta. Para los neoliberales seguridad alimentaria es el derecho que tienen los consumidores a obtener alimentos «baratos» donde sea. Pero esto es relativo, porque, por ejemplo, la soya y el trigo que dejamos de producir los importamos cada vez más caros, y hoy tienen un precio 40% y 12% mayor que el año anterior; lo mismo pasa con el algodón. Amén de las divisas que hay que invertir para comprarlos, generando empleo pero para los agricultores de los países que los producen. Y, por otro lado, los precios bajos con los que la leche fue importada masivamente en el año 2001, nunca les fueron trasladados a los consumidores, que debieron seguirla pagando cara a pesar de ser un alimento de primera necesidad.

En las negociaciones del ALCA es muy común oír el término ‘sector sensible’, refiriéndose a los productos del campo colombiano que forman el componente más importante de la dieta básica de la nación y, por ello, son responsables de su seguridad alimentaria. Estos productos podrían afectarse con el ALCA y pueden ser llevados hasta su extinción.

Lo cierto es que en el agro colombiano no hay producto que no sea sensible: lácteos, cereales, oleaginosas, papa, panela, azúcar, plátano, frutas, hortalizas, fríjol, carnes. Hasta el algodón industrial lo es. Pero esa sensibilidad de nada les sirvió a los gobiernos neoliberales. En el decenio pasado entregaron nuestro mercado con la apertura de los noventa, bajando aranceles, y simultáneamente desaparecieron el Idema y –con él– los precios de sustentación, debilitaron casi hasta la extinción al ICA y con Corpoica se marchitó la investigación en las ciencias agropecuarias, y los créditos de fomento se acabaron al eliminar la Caja Agraria. Es decir, se hizo todo lo que no se debía hacer. Mientras tanto, Estados Unidos montó y desarrolló la ingeniería genética y pide que le abramos nuestras fronteras a sus productos y capitales, a la vez que incrementan los subsidios a sus agricultores. Para los próximos siete años los pasan de 100.000 millones a 180.000 millones de dólares. Y al ver que la apertura era un buen negocio, y después de acabar con nuestro trigo y nuestro maíz, les dio por

profundizarla, creando el Área de Libre Comercio de las Américas para inundarnos de lo que ellos producen en abundancia con tecnología de punta y altos subsidios. Lo que nuestros gobernantes olvidan, o esconden, es que estos productos representan para nosotros más de 4 millones de empleos agrícolas y la subsistencia de 11,5 millones de colombianos que viven en los 1.050 municipios de nuestra geografía.

Como si lo anterior no bastara, se han empeñado en alegar que los agricultores colombianos somos latifundistas, como dice Rudolf Hommes con el beneplácito de muchos dirigentes, a quienes fletaron con ese propósito en forma descarada, lo mismo que a los medios de comunicación. No les tiembla la voz para mentir, porque muy bien saben que el trigo, el maíz y el fríjol han sido sembrados fundamentalmente por pequeños productores. Y también conocen, que en la producción arrocerá somos 28 mil cultivadores, de los cuales 85% tienen explotaciones menores a 20 hectáreas. Para el señor Hommes y sus amigos estos son latifundistas, pero no lo son los arroceros norteamericanos, con grandes empresas de miles y miles de hectáreas, y quienes reciben todo el apoyo del gobierno más rico de la Tierra. Es el mundo al revés. Para estos asesores y gobernantes, que venden la Nación, su labor mercenaria es digna de mérito y alabanza, mientras califican de zánganos y pechugones a los productores nacionales que viven los riesgos de empresas amenazadas por la competencia extranjera, el abandono oficial y la violencia sanguinaria.

Dicen sin ningún empacho, recordémoslo, que el pan en Colombia es el segundo más caro de América y que por ello deben ser arrasados los pocos cultivos de trigo que sobreviven en Nariño o en Boyacá. Pero ocultan que 95% del trigo que se consume en nuestro país es importado, precisamente porque acabaron con la producción triguera nacional en los años sesenta utilizando el mismo argumento de ahora: que sale más barato importarlo que producirlo y que su deseo es proteger al consumidor. Nos vuelven a mentir. Y repiten sin ninguna vergüenza que los habitantes de la ciudad tienen derecho a alimentos más baratos así sean importados, que no se debe subsidiar nuestra producción y que nuestras tierras deben dedicarse a cultivar especies tropicales, que no se dan en los países que nos proponen este tratado. Y el gobierno, ahí sí, ofrece préstamos para cultivar pitayas, uchucas, feijoas y otras frutas exóticas.

Son, desde luego, argumentos deleznable porque «lo más caro para un país es lo que no es capaz de producir», como agitamos en la bandera de la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria. El ATPA, o ATPDEA, que entre otras cosas tuvo su origen como una compensación por la eliminación de los cultivos ilícitos, lo ponen ahora como señuelo para que el gobierno apruebe el ALCA, lo cual – desde luego – tiene tufo de chantaje y no presenta ninguna relación favorable costo-beneficio para el país, porque el incremento en las exportaciones del ATPDEA en ocho años no pasó de 1,2 billones de pesos y 45 mil nuevos empleos, y lo que está en juego es nuestro mercado interno que pasa de 20 billones de pesos y genera 4 millones de empleos seguros. Además, lo que ofrecen con el ATPDEA es incierto, para competirlo con países más pobres que el nuestro, es parcial pues sólo se aplica a unos cuantos productos, y es temporal pues termina en el año 2006 cuando empieza a aplicarse el ALCA, mientras lo que nos van a imponer con el Área de libre Comercio de las Américas será permanente, cada vez más fuerte y aplicado a todas las mercancías y servicios.

Pero aún más: los mismos cultivos tropicales nos han dejado experiencias negativas. El café y el banano son cultivos tropicales y aunque se producen bien entre nosotros nos toca pelearnos el mercado

con los demás países productores y las transnacionales, que controlan su comercio y fomentan las siembras para que haya superproducción y así poder pagarle a los arruinados cultivadores del Tercer Mundo lo que ellas tengan a bien. Para los productos tropicales hay nichos de mercado relativamente pequeños que se saturan rápidamente, pues la humanidad no se alimenta propiamente de ellos, sino de los 11 productos de la dieta básica, la cual está constituida por cereales, leche, carnes, papa, huevo, etc., esos sí producidos y subsidiados por las grandes potencias mundiales.

Debe quedar claro que no nos oponemos a la siembra de especies tropicales, que desde luego deben ser incentivadas por el gobierno. Pero lo que no aceptamos es que tengamos que restringirnos a cultivos tropicales, de rentabilidad y mercados inciertos, mientras se entrega la producción nacional de alimentos básicos y se permite el aumento desbordado del desempleo rural. Desde este punto de vista, nos oponemos a la convertibilidad, o sea al cambio masivo de cultivos tradicionales y transitorios por especies tropicales y exóticas. Un ejemplo claro es el café orgánico, que tiene un nicho de mercado pequeño que debe desarrollarse, pero no sobre la base de sustituir las 600 mil hectáreas de café convencional, las cuales debemos tecnificar y mejorar exigiendo para ello el apoyo del Estado y de la Federación de Cafeteros.

Retomando el tema inicial de los cultivos sensibles, en el ALCA tenemos el caso del arroz. Su precio promedio en el mercado nacional –puesto FOB– es 400 dólares y en el mercado internacional 180 dólares; o sea, se trata de un cultivo sensible que desaparecería. El arroz colombiano es poco competitivo, pero no por culpa de los agricultores; en Colombia los insumos valen dos y hasta tres veces más que en los países competidores del ALCA, y la única explicación que da el gobierno es la de "riesgo país", sin mencionar el tema de los subsidios que en Colombia se reduce a incentivar el almacenamiento en época de sobreproducción de arroz, y pare de contar. De Ecuador hay importaciones anuales de 150 mil toneladas por Pacto Andino, y entra arroz triangulado por Venezuela. No obstante todo lo anterior, el sector subsiste, pero porque no ha empezado el ALCA. Con el ALCA, vendría la extinción.

Pero más sensible que el arroz es la leche. A la lechería le tocó recoger la tierra de cafeteros, trigueros, maiceros, aldoneros y todos los quebrados del agro colombiano y, además, tiene excedentes exportables que deberían ser subsidiados por el Estado.

Y podríamos seguir mencionando productos sensibles, desde las carnes hasta los huevos, pasando por el resto de cereales y oleaginosas: en mayor o menor grado todos son sensibles al ALCA.

¿Qué hacer? Creemos que la solución no está en la convertibilidad ni en la desgravación gradual a diez años, pues la competitividad es con dinero y ese no es propiamente el caso de Colombia. Tampoco creemos que, por sensible que sea el producto, vayan a tener consideraciones particulares. La lucha no puede ser por sectores de producción. Debemos estar unidos: todos –la SAC y las otras organizaciones– porque por bien que le vaya a un renglón en las negociaciones, lo más que logra es demorar el momento de su quiebra, de su desaparición nacional. Unos tendrán cinco años de vida, otros diez si les va mejor, pero seguramente su ruina total llegará antes de que el arancel llegue a cero.

Debemos tener en cuenta que Estados Unidos ha manifestado repetidamente que no negocia los subsidios en el ALCA. Pero no podemos ceder. Nuestra posición es que si no se eliminan los subsidios

no puede haber negociación. Sin olvidar que incluso eliminándolos quedamos en desventaja pues nos ganan en adelantos tecnológicos, en costos de los insumos, en seguridad y en todos los estímulos a la producción. El Estado colombiano, al contrario, recorta cada vez más su apoyo al campo, como está ocurriendo por ejemplo con el Incentivo a la Capitalización Rural (ICR).

Estamos seguros de que además de divulgar la necesidad de la defensa del agro y educar y agitar sobre ello en foros, congresos, marchas y debates, la única solución es la unión de todos los sensibles contra los insensibles, rechazando y combatiendo la orquesta que suena todos los días, y cada vez más fuerte, contra la producción nacional. La unión nos debe llevar sin egoísmos, sin vacilaciones ni miedos, a persuadir por todos los medios civilizados a nuestro alcance sobre el hecho evidente de que hay 11,5 millones de colombianos y 4,5 millones de empleos que se verían gravemente afectados con el ingreso de Colombia al ALCA. No podemos permitir esta nueva imposición contra nuestra patria, la cual nos llevaría a la pérdida completa de la seguridad alimentaria y de la soberanía nacional, aumentando sensiblemente los cultivos ilícitos hoy existentes y los factores de desestabilización social. No hay otra consigna posible: ¡Defendamos la producción y el trabajo de la nación!
